



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
PODER LEGISLATIVO



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

OFICIO NÚMERO: LXIII-CEY-013/2022.
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
NÚMERO: 118/2022.
PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS.
AUTORIDADES RESPONSABLES: EL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
Y OTRA.
ASUNTO: SE RINDE INFORME.
SECCION DE TRÁMITE DE
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES
Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD.

H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
C. MINISTRO INSTRUCTOR ALBERTO PÉREZ DAYÁN.
PRESENTE.

DIP. INGRID DEL PILAR SANTOS DÍAZ, en mi calidad de Diputada Presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera Legislatura, del Periodo Ordinario de sesiones correspondiente al Segundo año de su Ejercicio Constitucional, personalidad que se acredita en términos de la copia certificada de Acuerdo de fecha 31 de agosto del año 2022, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el mismo día, en el que se declaran electos los diputados para integrar la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera Legislatura, que fungirá durante el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio Constitucional, comprendido del 1 de septiembre al 15 de diciembre del año 2022; y con fundamento en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco como representante de este órgano Legislativo, señalando como Delegados en términos del artículo anteriormente referido a los Licenciados en Derecho María José Andueza Medina y/o Anahí Alejandra Góngora Leal y/o Rodrigo Ignacio Ávila Cortes y/o Emir Alejandro Trujeque Góngora y/o Ariel Jesús Cetina Rivero, conjuntamente o independientemente uno del otro. Asimismo, señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones, el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, el inmueble ubicado en periférico poniente tablaje catastral número 33083 Juan Pablo II Alborada de la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, así como el correo electrónico direccion.juridico@congresoyucatan.gob.mx. Ante Usted, con todo respeto comparezco y expongo:

Con fundamento en los artículos 10, 11, 23 y 64 de la Ley Reglamentaria de



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo por medio del presente ocuro y dentro del término legal establecido, a rendir el informe con respecto a la demanda de Acción de Inconstitucionalidad promovida por **MARÍA DEL ROSARIO PIEDRA IBARRA**, en su calidad de **Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos**, en contra del H. Congreso del Estado y otra autoridad.

1. NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ RECLAMA LA PROMOVENTE:

- *Artículos 3, fracción XXI, 67, fracción I, en la porción normativa "y la edad", y 128, fracción VII, inciso a), de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, así como las disposición transitoria séptima del Decreto 532/2022 por el que se expidió dicho ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la entidad el 21 de julio de 2022, cuyo texto es el siguiente:*

Artículo 3. Definiciones

Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I a XX. (...)

XXI. Salario regulador: equivale al ochenta y cinco por ciento del promedio ponderado de los salarios de cotización que percibió la persona servidora pública durante los últimos veinte años de su vida activa como trabajador en una o más entidades públicas, previa actualización con base en el índice nacional.

Artículo 67. Requisitos

Los familiares a que se refiere la fracción IV del artículo anterior, tendrán el derecho a la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, si reúnen los siguientes requisitos:

*I. Que acrediten el parentesco y la edad en los términos de la legislación civil.
(...)*

Artículo 128. Reglas para las personas beneficiarias

Las personas beneficiarias de pensiones por fallecimiento por riesgos de trabajo y por fallecimiento por causas ajenas al trabajo deberán sujetarse a las siguientes reglas:

VII. Los derechos a percibir pensión se pierden por las siguientes causas:

- a) Cuando la persona cónyuge beneficiaria contraiga nupcias o comience a vivir en concubinato.
(...)*



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

Artículos transitorios

Séptimo. Salario regulador de las personas servidoras públicas en transición
Tratándose de las personas servidoras públicas en transición, el salario regulador a que se refiere la fracción XXI del artículo 3 de esta ley, será un porcentaje del promedio ponderado de los últimos salarios de cotización que hubiera percibido la persona servidora pública, previa actualización con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, dependiendo de los años que a la fecha de entrada en vigor de este decreto le falten para cumplir treinta años de cotización conforme a la siguiente tabla:

2. ANTECEDENTES:

PRIMERO.- En sesión de la Diputación Permanente de fecha 13 de julio del año 2022, se turnó para su estudio, análisis y dictamen respectivo a la Comisión Especial para la atención de la situación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, la iniciativa de Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, suscrita por los diputados José Crescencio Gutiérrez González, Erik José Rihani González, Jesús Efrén Pérez Ballote, Manuela de Jesús Cocom Bolio, Luis René Fernández Vidal y Dafne Celina López Osorio, integrantes de la LXIII legislatura del Congreso del Estado.

SEGUNDO.- Posteriormente, en sesiones de trabajo de la Comisión Especial para la atención de la situación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, de fechas **14, 15 y 18 de julio del 2022**, fue analizado el Dictamen de la iniciativa en comento, siendo aprobado por mayoría el día **18 de julio del 2022**.

TERCERO.- El día **18 de julio del 2022**, a las dieciséis horas con dieciocho minutos, se llevó a cabo la sesión de la Diputación Permanente, en la cual, convoca para la celebración del Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al primer año constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, proponiendo que dicha celebración se lleve a cabo el día 21 de julio del 2022, siendo aprobada por mayoría.

CUARTO.- En virtud de que el Dictamen de la Comisión Especial para la atención de la situación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, que expide la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del

P.S.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

Estado de Yucatán, había sido distribuido en su oportunidad a todos y cada uno de los integrantes de la Diputación Permanente, en fecha **21 de julio del 2022**, fue sometido a votación en Sesión Extraordinaria del Pleno de este H. Congreso del Estado, el cual fue aprobado por mayoría.

QUINTO.- Finalmente, en fecha **21 de julio de 2022** fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el Decreto 532/2022, por el que se emite la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, entrando en vigor al día siguiente, es decir, el 22 de julio del 2022.

3. INFORME:

PRIMERO.- Deviene de infundado el primer concepto de violación hecho valer por la Comisión quejosa, mediante el cual reclama la inconstitucionalidad de la porción normativa “y la edad” prevista en el artículo 67, fracción I de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán contenida en el Decreto 532/22, el cual dispone los requisitos específicos para que los ascendientes puedan acceder a la prestación de servicio médico, por cuanto no se transgredieron los principios constitucionales de seguridad y legalidad jurídica.

Esa H. Comisión Nacional de Derechos Humanos, estima que el requisito consistente en acreditar la edad previsto en el artículo 67, fracción I, de la Ley en estudio deviene de inconstitucional por vulnerar el derecho a la seguridad y el principio de legalidad, toda vez que no precisa un parámetro o rango de la edad que será considerada y conforme a la cual la autoridad correspondiente determinará si se cumple o no con dicho requisito.

Así, dice la Comisión quejosa que, al no establecerse una edad mínima o máxima para poder ser beneficiaria de dicha prestación, será la autoridad competente quien decidirá su cuenta o no con la edad necesaria para poder acceder a la prestación de servicio médico.

Como se puede apreciar, la quejosa se duele de que la porción normativa no establece un límite de edad, o que no establece un mínimo o máximo de edad de

RS.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

parámetro para que los ascendientes accedan a la prestación de servicio médico como beneficiario del servidor público.

En efecto, los principios de legalidad y seguridad jurídica constituyen un límite al actuar de todo el Estado Mexicano, es decir constriñen a las autoridades a conducir su actuar conforme a lo expresamente señalado en las leyes, dotando de certeza al gobernado respecto de las consecuencias que podrías llevar determinadas situaciones jurídicas, obligando a dichas autoridades a establecer disposiciones claras y precisas.

Ahora bien, resulta infundado el argumento de la quejosa, puesto que el hecho de que se le solicite la edad a los beneficiarios a la prestación de servicio médico, no excluye de manera natural ni se contrapone a que los de determinada edad pueda o no beneficiarse del servicio médico al que tuvieran derecho, sino por el contrario la conjugación de dicho requisito con los demás solicitados en términos del artículo 67 de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán coadyuvan a hacer efectiva dicha garantía social de mérito.

5

Por otro lado, el requisito previsto en la fracción I del artículo 67 de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, se justifica en que el derecho a la seguridad social sí prevé la posibilidad de condicionar el goce de los servicios médicos a demostrar la necesidad y relación con el servidor público beneficiario, ya que solo así se puede garantizar el bienestar familiar finalidad que pretende el derecho a la seguridad social.

Por otro lado, regular la edad como dice la quejosa que no se realizó, eso sí, excluiría a beneficiarios, discriminándolos por su edad, siendo que los Estados deben asegurar que dicho derecho de servicio médico sea garantizado a quienes acrediten tener derecho a dicha prestación.

Ello es así, porque el destino y finalidad principal de la previsión social bajo el diseño de un sistema de reparto financiero pretende en suma garantizar, resguardar y amparar el sostenimiento de las familias para su subsistencia, así como el otorgamiento de servicios básicos para su bienestar como el servicio de salud, vivienda y protección ante la enfermedad y la vejez, o cualquier otra contingencia que perjudique el ingreso familiar, y de apoyo.

PS



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

Luego, que el legislador local, en uso de la libertad legislativa que deriva del propio apartado B del artículo 123 constitucional, estableciera como requisito para acceder al servicio médico como beneficiario, la verificación de la edad del que se ostenta como beneficiario, no contraviene los principios de legalidad y seguridad jurídica, pues contrario a lo que alega la quejosa, no se restringe el derecho de recibir la prestación referida.

SEGUNDO.- El concepto de violación segundo hecho valer por la Comisión quejosa, mediante el cual manifiesta que el artículo 128, fracción VII, inciso a) de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, transgrede los derechos humanos de igualdad y no discriminación, a la seguridad social, y al libre desarrollo de la personalidad, deviene totalmente de infundado, por cuanto no se transgredieron los principios constitucionales en comento.

6

En efecto, el artículo 128, fracción VII, inciso a) de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, no infringen los principios de igualdad y no discriminación, puesto que la pensión por viudez tiene como finalidad garantizar la subsistencia de los beneficiarios del trabajador después de acaecida su muerte, entre los cuales se encuentra el cónyuge o concubino que le sobreviva, pero no así cuando éste contraiga nupcias o comience a vivir en concubinato, pues en este caso, no existe subsistencia que garantizar en virtud de que la finalidad del matrimonio concluyó precisamente con el nuevo enlace; estimar lo contrario, implicaría que la ley le concede validez a todos los matrimonios que se celebren subsistiendo el primero y en consecuencia se reconozcan los derechos y obligaciones que surgen entre los contratantes con lo cual se impediría brindar protección y bienestar a los trabajadores y sus familiares, previstos en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX de la Constitución.

En virtud de que la parte quejosa hace valer la violación a los derechos de igualdad y no discriminación, resulta pertinente hacer referencia a los alcances de éstos, los cuales están previstos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone lo que sigue.

PS.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

“Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. [...]”

El primer párrafo del precepto constitucional reproducido prevé el derecho de igualdad, en la medida que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.

En el último párrafo está contenido el derecho constitucional de no discriminación, en tanto se proscribe cualquier distinción motivada por razones de género, edad, condición social, religión o cualquier otra análoga que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Los derechos constitucionales de igualdad y no discriminación están estrechamente vinculados, pero no son idénticos; en todo caso son complementarios, incluso la prohibición de discriminar constituye una de las distintas manifestaciones que adopta el derecho de igualdad, en tanto la norma constitucional limita la posibilidad de tratos diferenciados no razonables o desproporcionados entre las personas, a partir

P.S.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

de determinadas características que presenten las personas, con base en las cuales se impone la proscripción de discriminar.

De la lectura de este dispositivo, se advierte que los derechos de igualdad y no discriminación implican que las autoridades no traten de manera diferente a los individuos cuando se encuentren en la misma situación jurídica, es decir, que sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicha garantía se refiere a la igualdad jurídica, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato respecto de quienes se ubican en similar situación de hecho, situación que por ser Ley Suprema debe acatarse por todas las autoridades del país.

Debe ponerse de relieve que la igualdad y la no discriminación están en relación directa con la situación jurídica de los destinatarios de la norma, y no así de sus otras situaciones particulares tales como económicas, de negocios, de mercado, materiales, etcétera.

8

El derecho de igualdad tiene un carácter complejo, pues no postula la paridad absoluta entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato como criterio básico para la producción normativa.

Así, del referido derecho derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario:

- Por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual y,
- Por otro lado, un mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a establecer diferencias entre supuestos de hechos distintos cuando la propia Constitución las imponga.

Por otro lado, el de no discriminación, por ser una manifestación del derecho de igualdad, como se ha dicho, se encuentra más enfocado en desterrar del sistema jurídico toda distinción de trato, pero que se encuentre motivada, en específico, por las cualidades propias de la persona que atenten contra su dignidad humana, tal es el

PS.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

caso del género, edad, condición social, religión, discapacidad, y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades.

Así, la finalidad del derecho de igualdad en la ley radica en colocar a los habitantes del país en condiciones tales que puedan acceder a otros bienes y derechos superiores protegidos constitucionalmente, lo que significa que el beneficio que un gobernado obtenga, también lo deberá obtener otro que se encuentre en igualdad de circunstancias.

El derecho de igualdad implica que se debe tratar igual a quienes se encuentren en la misma situación y de manera desigual a los sujetos que se ubiquen en una situación diversa, lo que implica que el legislador puede crear categorías o clasificaciones que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales; pero siempre evitando cualquier distinción no razonada y desproporcional, discriminatoria de las personas.

En suma, el principio de igualdad contiene los rasgos esenciales que a continuación se resumen:

- No toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción al derecho de igualdad, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carecen de una justificación objetiva y razonable.
- El derecho de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten injustificadas por no estar fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados, los cuales podrán ser apreciados en la exposición de motivos o advertirse de la misma norma.
- Por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente válida, no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable, además, que las consecuencias jurídicas que resultan de tal disposición sean adecuadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.

P.S.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

De acuerdo con las consideraciones anteriores, la norma que prevé un trato desigual será inconstitucional cuando imponga arbitrariamente discriminaciones entre situaciones jurídicas objetivamente iguales, no distinga de la misma forma situaciones discrepantes o carezca de razonabilidad.

Las anteriores consideraciones han sido reiteradas por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación y fueron plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 42/2010 de rubro "IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA."

Expuesto lo anterior, es oportuno transcribir el contenido del precepto reclamado, el cual dispone lo siguiente:

*"Los derechos a percibir pensión se pierden por las siguientes causas:
a) Cuando la persona cónyuge beneficiaria contraiga nupcias o comience a vivir en concubinato."*

10

Ahora, para verificar si el artículo transcrito contraviene los derechos de igualdad y no discriminación, es conveniente atender a su contenido en el contexto normativo, es decir, con relación con el propio numeral 128, en sus diversas fracciones, respecto a los requisitos para el otorgamiento de la pensión de viudez, el cual es del tenor literal siguiente:

Artículo 128. Reglas para las personas beneficiarias

Las personas beneficiarias de pensiones por fallecimiento por riesgos de trabajo y por fallecimiento por causas ajenas al trabajo deberán sujetarse a las siguientes reglas:

I. El orden para gozar de las pensiones descritas en este artículo será:

a) El cónyuge supérstite e hijas e hijos menores de dieciocho años o de hasta veinticinco años en caso de que dependan económicamente de la persona servidora pública o persona pensionada y que acrediten estar estudiando o presenten alguna discapacidad, durante el tiempo que esta dure.

b) A falta de cónyuge legítimo, la persona con quien haya vivido en concubinato que tenga acreditado dicho carácter en los términos de la legislación aplicable. Si al morir la persona servidora pública o persona pensionada, tuviera varias concubinas o concubinos, ninguno tendrá derecho a pensión.

c) A falta de cónyuge, hijos o persona en concubinato, la pensión se entregará a los ascendientes de la persona servidora pública o



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

persona pensionada, por grado sucesivo, en caso de que hubieran dependido económicamente de la persona servidora pública o persona pensionada.

II. La pensión a que tengan derecho las personas beneficiarias se dividirá en partes iguales y el pago será retroactivo al día siguiente al del deceso de la persona servidora pública o persona pensionada.

III. Cuando fuesen varias las personas beneficiarias de una pensión y alguna de ellas pierde el derecho, la parte que le corresponda quedará a beneficio del fondo de pensiones.

IV. Si otorgada una pensión aparecen otras personas beneficiarias con derecho a la pensión, se suspenderá el pago, hasta que se acredite el pago a quien en derecho proceda, debiéndose cubrir en forma retroactiva hasta el momento de la suspensión, sin que la nueva persona beneficiaria tenga derecho a reclamar el pago de las cantidades cobradas por las primeras.

V. En caso de que dos o más personas beneficiarias reclamen el derecho a la pensión como cónyuge supérstite, se suspenderá el trámite y se estará a la resolución judicial que corresponda, sin perjuicio de continuar el trámite por lo que respecta a las hijas e hijos, otorgándoles el porcentaje respectivo.

VI. Cuando una persona beneficiaria, ostentándose como cónyuge supérstite exhiba la sentencia ejecutoria que acredite el estado civil que aduce para reclamar un beneficio que se haya concedido a otra persona por el mismo concepto, procederá la revocación de la pensión y se concederá a la persona acreditada, quien la percibirá a partir de la fecha de la suspensión, sin que tenga derecho a reclamar las cantidades cobradas por el primero.

VII. Los derechos a percibir pensión se pierden por las siguientes causas:

a) Cuando la persona cónyuge beneficiaria contraiga nupcias o comience a vivir en concubinato.

b) Cuando las hijas o hijos cumplan la mayoría de edad, a menos de que dependan económicamente de la persona servidora pública o persona pensionada y estén realizando estudios de nivel medio superior o superior en planteles que se dediquen a la enseñanza, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General

de Educación y de la Ley General de Educación Superior, así como las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley, cuyo objeto sea la enseñanza, en los términos y características que determine el instituto. Estos perderán el derecho al cumplir veinticinco años de edad.

c) Por fallecimiento de la persona beneficiaria.

Del contenido de los preceptos citados derivan las siguientes precisiones:

➤ La muerte de un trabajador asegurado, por causas ajenas al trabajo, genera el derecho a las pensiones de viudez.

P.S.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

➤ El derecho al pago de las pensiones por causa de muerte, inicia a partir del día del fallecimiento del asegurado y cesará con la muerte del beneficiario o cuando la viuda o concubina contraiga matrimonio o se encontrare en concubinato.

➤ La pensión de viudez le corresponde en primer lugar a el *cónyuge supérstite e hijas e hijos menores de dieciocho años o de hasta veinticinco años en caso de que dependan económicamente de la persona servidora pública*. A falta de cónyuge, tiene derecho a recibir la referida prestación, la mujer con quien el asegurado hubiere vivido en concubinato.

Es decir, conforme a lo anterior, la muerte del asegurado genera el pago de la pensión por viudez, la que se otorgará una vez que se satisfagan diversos requisitos legales; además, destaca que el derecho al goce de dicha pensión comienza desde el día del fallecimiento del asegurado; empero, cesará cuando la viuda o concubina contraiga matrimonio o se encuentre en concubinato.

12

Como se advierte, las normas en estudio precisan dos causas para que cese el derecho al goce de la pensión por viudez, a saber: 1ª: Cuando el beneficiario muera; y 2ª: Cuando la viuda o concubina contraiga matrimonio o se encuentre en concubinato.

De lo anterior, se advierte que las normas jurídicas regulan dos situaciones de hecho: la primera es cuando la viuda no contrae matrimonio ni se encuentre en concubinato y la segunda cuando la viuda contraiga nupcias o esté en concubinato.

Precisamente en la forma en que las normas cuestionadas regulan el goce y cese del derecho al goce de la pensión por viudez están enderezados los argumentos de impugnación, puesto que la parte quejosa estima que los preceptos cuestionados otorgan un trato distinto e injustificado entre las personas beneficiaria, pues solamente las y los cónyuges supérstites, en su carácter de beneficiarios, pueden perder la pensión si contraen matrimonio o llegan a vivir en concubinato; lo que a decir de la quejosa representa un problema de igualdad.

Sin embargo, se estima que las normas jurídicas en estudio no contravienen el derecho constitucional de igualdad y no discriminación, fundamentalmente porque

25



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

precisamente la quejosa describe y reconoce situaciones de hecho totalmente distintas y, por ese motivo, no se pueden comparar todos los supuestos entre los diferentes beneficiarios y la o el cónyuge supérstite pensionado.

Además de que resulta falso lo manifestado por la quejosa, en cuanto a que solo el o la cónyuge supérstite pueda perder el derecho de pensión otorgada a los beneficiarios, pues nótese que la propia fracción VII del mismo artículo 128 de la Ley que nos ocupa, establece que también se podrá perder el derecho referido, a los hijos e hijas que cumplan la mayoría de edad, a menos que dependan económicamente de la persona servidora pública y estén realizando estudios de nivel medio superior o superior.

De ahí que si bien las normas jurídicas en estudio le atribuyen diversas consecuencias jurídicas a el o la cónyuge supérstite, lo cierto es que ello obedece a que una viuda que contrajo matrimonio o está en concubinato, genera diversas consecuencias legales para los efectos de la ley de seguridad social, una de las cuales es que ante una nuevo estado civil cesa el derecho de la pensión de viudez por prescripción expresa de la norma.

13

En otro aspecto, la quejosa ahora alega que la disposición impugnada infringe el derecho de seguridad social, esto es de gozar de una pensión al cesar la de viudez de la beneficiaria por el solo hecho de contraer matrimonio, pese a que fue adquirida legítimamente por el asegurado y reconocida legalmente por la autoridad encargada en ejercicio de sus funciones, lo que implica que a su modo de ver, condiciona a que el o la cónyuge supérstite no vuelva a tener el estatus de csada o casado o de habitar en concubinato, so pena de privarla de ese derecho.

En efecto, el derecho a la seguridad social está reconocido en la fracción XXIX, del apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente dispone:

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros,

P-S -



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: [...]

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares."

El precepto constitucional transcrito prevé la seguridad social como derecho humano que tiene como objeto proteger a las personas contra el riesgo de la muerte.

Sin embargo no precisa los presupuestos de acceso al derecho de la seguridad social, en relación con la obtención de una pensión derivada de la muerte de un asegurado, como es la pensión de viudez, por lo que es incuestionable que deja al legislador ordinario la regulación de tales aspectos.

De manera que si el precepto impugnado establece que tendrá derecho a recibir la pensión de viudez derivada de la muerte de un asegurado fallecido, entre otros beneficiarios, la o el viudo y cesará el goce de ese derecho cuando se contraiga matrimonio o se encuentre en concubinato, sólo estableció los requisitos necesarios para tener derecho a la pensión correspondiente, pero de ninguna forma esto indica que ese precepto contravenga el derecho de seguridad social, justamente dicho requisito es el que consideró adecuado para garantizar el derecho constitucional a la seguridad social en el ramo del seguro de muerte y, en esa medida, lejos de contravenir este principio constitucional, lo protege.

Además, el hecho de que las normas en estudio prevean como causas para cesar en el goce del derecho a la pensión de viudez el que la o el viudo o concubino contraiga matrimonio o se encuentre en concubinato, de manera alguna significa que el legislador regule aspectos ajenos a la muerte del asegurado fallecido, sino que sólo representa la verificación de los requisitos necesarios para tener derecho a la pensión de viudez.

Consecuentemente, los preceptos cuestionados no contravienen el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

P.S.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y en lo conducente, lo resuelto en el amparo en revisión 193/2018, resuelto en sesión de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, resuelto por unanimidad de cuatro votos; así como la tesis 2a. L/2019 (10a.) de esta Segunda Sala, de rubro: "PENSIÓN DE VIUDEZ. EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA, AL PREVER UNA CONDICIÓN PARA SU OTORGAMIENTO A LA CONCUBINA DEL ASEGURADO, NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL QUE TUTELA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

En ese tenor, el precepto tildado de inconstitucional no infringe el derecho de igualdad, ni seguro social, al prever las causas por las que puede cesar el goce de la pensión por viudez, cuando, por ejemplo, la o el viudo o concubino contraiga matrimonio o se encuentre en concubinato, puesto que tales disposiciones no permiten la emisión de un acto de carácter privativo, sino que regulan las condiciones para el disfrute de la referida pensión, en los términos previstos en las Leyes del Seguro Social y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. En consecuencia, los preceptos cuestionados no contravienen el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, el derecho a la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado pretende proteger al individuo de contingencias futuras, por lo que debe cubrir los accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no profesionales, la maternidad y la invalidez, entre otras contingencias, resultando relevante para el presente análisis que la seguridad social también debe prever una pensión por sobrevivencia ante la muerte del servidor público a fin de no dejar al desamparo a sus beneficiarios, familiares o personas cuya sobrevivencia dependiese del trabajador.

Previsión que funciona en la lógica ante la pérdida de los recursos por la muerte de quien fuera sostén familiar, entonces la norma de seguridad social debe garantizar la continuidad de esa sobrevivencia mediante el pago de una pensión conforme la gradualidad debida ante los años de cotización, para que los beneficiarios puedan seguir con esa fuente de ingresos para su sobrevivencia en la medida de que se justifique la necesidad, de modo que la base mínima sí prevé la posibilidad de condicionar el goce de la pensión de sobrevivencia a demostrar la necesidad de

P.S.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

dependencia y con ello obtener la garantía de seguridad social ante la imposibilidad o presunción de no poder allegarse de ingresos, la cual incluso puede ser reducida en la medida de garantizar el ingreso complementario para la subsistencia, ya que solo así se puede garantizar el bienestar familiar, finalidad que pretende el derecho a la seguridad social.

Además que, como parte de los principios de previsión social, debe considerarse que los derechos prestacionales de los trabajadores no se configuran en función a criterios utilitarios que sean benéficos para los empleadores, en tanto que éstos quedan igualmente obligados a garantizar las bases mínimas del derecho a la seguridad social, especialmente porque los beneficios del derecho a la seguridad social no son concesiones gratuitas del Estado para los servidores públicos, sino que éstos contribuyen al fondo en el que se materializa el derecho mismo de seguridad social, porque durante toda su vida laboral realizan aportaciones para el sostenimiento de los recursos que garantizan la seguridad social.

16

Luego, el H. Congreso al que represento, en uso de la libertad legislativa que deriva del propio apartado B del artículo 123 constitucional, estableció como requisito a la transmisión de derecho de seguridad social la verificación del vínculo matrimonial o de concubinato, a causa de muerte del titular del derecho a la seguridad social, lo cual no contraviene los principios de previsión social, porque dicho requisito, constituye una restricción que encuentra una finalidad constitucionalmente válida e idónea para alcanzar el fin máximo de la previsión social: el bienestar de los dependientes.

Asimismo, dicho requisito cumple con una finalidad constitucionalmente válida, en tanto pretende garantizar que los recursos que se originaron del esfuerzo contributivo del servidor público y solidario del Estado como patrón, se destinan al cumplimiento de los ejes torales del sistema local de previsión social, el auxilio de las personas que en realidad se ven afectados ante la contingencia de muerte del servidor público.

Por lo que la medida que condiciona el entregar la pensión por muerte a quienes aún se vieran afectados por haber dependido el servidor público fallecido por razón del vínculo familiar que los unía, constituye una medida que persigue una finalidad constitucional válida bajo los principios de previsión social.

P.S.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

Además, la medida legislativa resulta idónea para lograr la consecución de los fines constitucionales que se persigue. Lo que se explica, porque al considerar la dependencia económica ante la falta de beneficiarios en el eslabón de prelación para obtener la pensión por muerte del servidor público, se garantiza de mejor modo el cumplimiento de los fines de la previsión social, porque dada la multiplicidad de conformación de un entorno familiar en el que no necesariamente por razón de lazos filiales se establecen dependencias apoyo y solidaridad, con motivo de las distintas formas en que los seres humanos establecen lazos sentimentales y de ayuda mutua por medio de relaciones intersubjetivas que establecen una familia dentro de un mismo domicilio o bien relaciones afectivas con dependencias no solo emocionales sino también económicas, es que interesa más a la consecución de los fines que emanan del principio de previsión social el demostrar el vínculo de cónyuge o concubinato para conceder la transmisión de derechos de seguridad social, de ahí que la medida resulta idónea.

17

Aunado que la misma es necesaria en tanto se estima que no existiría otra medida alternativa que garantizara de mejor modo el procurar el bienestar y sostenimiento de los dependientes ante la muerte del servidor público titular de los derechos de seguridad social.

Y especialmente, porque la misma resulta proporcional en sentido estricto, en la medida que no restringe desproporcionalmente el derecho de los ascendientes a recibir la pensión por muerte del descendiente afiliado o pensionado al régimen de seguridad social del Estado de Yucatán.

Razón por la cual la condicionante establecida por este H. Congreso del Estado de Yucatán, resulta proporcional, en tanto permite que los derechos de seguridad social se transmitan ante la dependencia económica que ocurrió en vida del pensionado, lo que sí viene a mejorar el bienestar de los ascendientes, y del cónyuge o concubino, y con ello a cumplir con el objetivo total de la previsión social: la garantía de las condiciones mínimas de bienestar para el asegurado y sus dependientes sin importar hubiese sido total o parcial.

P.S.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

En suma, considerando que la pensión por causa de muerte busca proteger la seguridad y bienestar de los dependientes o miembros de una familia, entendida en una concepción amplia y dinámica, conforme el concepto constitucional de familia del artículo 4 de la Constitución Federal, es que ante el riesgo de la muerte del trabajador o pensionado la condición relativa que el cónyuge superstite pensionado no contraiga nupcia o llegará a vivir en concubinato, para gozar de una pensión por muerte, encuentra asidero constitucional sustentado en los principios de solidaridad, asistencia y ayuda mutua que responden no solo vínculos sanguíneos, y de sobrevivencia, sino también a vínculos y afectivos que deben ser protegidas por el sistema de previsión social.

Así las cosas, el precepto tildado de inconstitucional, no resulta serlo a la luz de los principios de previsión social, en tanto como se analizó supera el test de proporcionalidad; y de forma destacada porque encuentra coherencia en los fines que persigue el derecho a la seguridad social, sin que contradiga las bases mínimas que se han establecido en el parámetro de regularidad constitucional.

18

TERCERO.- El concepto de violación tercero hecho valer por la Comisión Nacional de Derecho Humano, en el cual manifiesta que el artículo 3, fracción XXI, de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, así como la disposición transitoria séptima del Decreto 532/2022 por el que se expidió dicho ordenamiento, transgreden los derechos humanos de seguridad social y de igualdad, así como el principio de previsión social, deviene totalmente de infundado, por cuanto no se transgredieron los principios constitucionales en comento.

Al respecto conviene señalar los argumentos de los que se sirve la quejosa para señalar que el artículo 3, fracción XXI de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, así como la disposición transitoria séptima del Decreto 532/2022, según transgreden los principios de seguridad social, igualdad y previsión social:

- Dice la quejosa que al prever un “salario regulador” para la determinación de las pensiones, impide que se garantice a las personas trabajadoras y a sus

RS.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

familias la vida digna y decorosa, pues no tiene una relación razonable entre las cotizaciones abonadas y la cuantía de la prestación pertinente.

- Que el artículo séptimo transitorio vulnera el derecho de igualdad entre las y los servidores públicos, ya que la base para calcular las pensiones no es la misma para todos los casos, sin que se advierta una razón justificable para ello, lo que ocasiona que a unos les corresponda una pensión más elevada mientras que a otros, una más baja.
- El diseño del “salario regulador” es contraria al derecho humano de seguridad social y al principio de previsión social, ya que la mencionada regulación no garantiza efectivamente a las y los trabajadores y sus familias una calidad de vida que tenía durante la prestación de sus servicios.
- La integración del “salario regulador” debe integrarse de la totalidad del promedio de los salarios cotizados.
- El artículo séptimo transitorio deja en una situación de desigualdad a los trabajadores en transición, pese a que todos ellos se encuentran en una situación semejante, es decir, no son pensionados y aún no tienen derecho a pensión.

19

A fin de desestimar los argumentos tendientes a declarar la inconstitucionalidad del artículo séptimo transitorio de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, es importante destacar que ésta tiene un ámbito de aplicación el cual comprende tres grupos de personas, siendo estos los siguientes:

- Nuevas generaciones, es decir aquellas personas que ingresaron ante el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, a partir del día 22 de julio del año 2022;
- Personas pensionadas o con derecho adquirido a pensión, las cuales tal y como señala el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Seguridad Social, comprende aquellos que ya tienen el carácter de jubilados o pensionados, o quienes a la entrada en vigor de la nueva ley, ya habían cumplido con los requisitos para el acceso a la jubilación voluntaria o jubilación necesaria reguladas en las fracciones I y II del artículo 63 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, ya abrogada.

RS-



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

- Personas en Transición, corresponde a aquellas personas que se hubieren afiliado al Instituto con fecha anterior a la entrada en vigor de la nueva ley, pero que no hayan cumplido con los requisitos para acceder a una jubilación voluntaria o necesaria, a las cuales se les aplicará las excepciones descritas en los transitorios del séptimo al décimo cuarto, esto de conformidad a lo establecido en el artículo Sexto Transitorio.

Para mayor abundamiento, y a fin de que se cuente con los elementos necesarios para identificar el ámbito de aplicación de la ley, me permito citar los artículos cuarto y sexto transitorios del Decreto 532/2022 por el que se expidió la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, que a la letra establecen lo siguiente:

“Cuarto. Personas pensionadas o con derecho a pensión

Las personas servidoras públicas que estén disfrutando una pensión a la fecha de entrada en vigor de este decreto la mantendrán en los términos y condiciones en que la obtuvieron. Lo mismo aplicará para las personas servidoras públicas que hubieran cumplido con los requisitos para el acceso a la jubilación voluntaria o jubilación necesaria reguladas por las fracciones I y II del artículo 63 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal que se abroga hasta antes de la entrada en vigor del presente ordenamiento. “

“Sexto. Personas servidoras públicas en transición

Las personas servidoras públicas que se hayan afiliado al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con fecha anterior a la entrada en vigor de este decreto y que no estén en el supuesto de su artículo cuarto transitorio, serán consideradas como personas servidoras públicas en transición, a las cuales les aplicarán las excepciones descritas en los siguientes artículos transitorios.”

Ahora bien, las disposiciones normativas reclamadas, en específico la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y el séptimo transitorio del Decreto 532/2022 por el que se expidió dicho ordenamientos, resultan ser constitucionalmente válidas, puesto que cumplen con otorgar la seguridad social contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XI de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que establece las bases mínimas que debe contener todo cuerpo normativo en materia de seguridad social, las cuales son:

P.S.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

"Artículo 123:

...

A...

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

I...

X...

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos

..."

Así, del numeral 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos que el mismo reconoce el derecho a la seguridad social y establece las prestaciones mínimas que contiene. En el apartado A, en la fracción XXIX, se enuncian los seguros que deben organizarse en beneficio de los trabajadores

P.S.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

a que se refiere ese apartado, así como de campesinos, no asalariados y otros sectores sociales, y sus familiares. En el apartado B, en la fracción XI, se enuncian las bases mínimas de la seguridad social a favor de los trabajadores de los Poderes de la Unión.

Asimismo, como es de explorado derecho, el derecho a la seguridad social se encuentra reconocido en los artículos XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

De igual forma, el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, dispone:

El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

22

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; y

Es decir, el derecho a la seguridad social está reconocido en el artículo 123, apartado B fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, únicamente se establecen las bases mínimas que deben de observarse en materia de seguridad social para los trabajadores del Estado, esto acorde con los instrumentos internacionales, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Protocolo de las Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Protocolo de Buenos Aires), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador".

DS.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

En este orden de ideas, el citado precepto constitucional 116, fracción VI, impuso a los legisladores locales, la facultad para expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre Estados y sus respectivos trabajadores, siguiendo las bases dispuestas en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo regular los procedimientos, requisitos y modalidades necesarias para el otorgamiento de las garantías de seguridad, atendiendo a las garantías individuales y sociales, los aspectos sociales, económicos, políticos y técnicos de las prestaciones de seguridad social.

Al respecto, la norma Constitucional, así como los Tratados Internacionales mencionados, no establecen las diversas hipótesis de acceso al derecho a la seguridad social, ya que no determinan por ejemplo, la forma de obtener una pensión jubilatoria, ni la manera de calcular el monto de la misma, únicamente establecen las bases mínimas para otorgar dicho derecho, por lo cual, se delegó al legislador local la regulación de éstas.

23

Es por lo anterior, que en primera instancia resulta inexacto y equivocado el argumento de la quejosa, respecto de la supuesta inconstitucionalidad de las disposiciones reclamadas, porque a su modo de ver el salario regulador que se estableció, debe integrarse de la totalidad del promedio de los salarios cotizados, pues no existe fundamento legal que obligue de tal forma.

De ahí que los numerales reclamados, se encuentren en total apego a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en consecuencia, no existe ninguna violación o afectación al derecho de los quejosos, como erróneamente aducen, ya que ni la norma Constitucional, ni los Tratados Internacionales mencionados, establecen las diversas hipótesis de acceso al derecho a la seguridad social, como por ejemplo, la forma de obtener una pensión, ni la manera de calcular el monto de la misma, sino que como se ha manifestado únicamente establecen las bases mínimas para otorgar dicho derecho, por lo cual, se delegó al legislador local la regulación de éstas.

Para robustecer lo anterior, sirve de sustento los siguientes criterios:

Época: Décima Época

P.S.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

Registro: 2003792
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1
Materia(s): Constitucional, Laboral
Tesis: 2a./J. 68/2013 (10a.)
Página: 636

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA PARA REGULAR SUS RELACIONES LABORALES EN LO QUE NO CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES. De los artículos 115, 116, fracción VI, 123, apartado B y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus diversos procesos de reforma, se concluye que el Constituyente dejó en manos del legislador estatal la creación de leyes de trabajo que regulen las relaciones laborales con los trabajadores al servicio de cada entidad federativa. En este sentido, no se obligó a los congresos locales a reproducir el contenido íntegro de las leyes reglamentarias de cada apartado del artículo 123 constitucional, pues de lo contrario, no se respetaría el Estado federado, sino que se impondría indiscriminadamente la aplicación de leyes federales bajo un inexistente concepto de "ley estatal". Consecuentemente, las legislaturas locales tienen libertad de configuración legislativa en lo que no contravenga las disposiciones constitucionales, sin que tengan la obligación de ajustar su legislación a las leyes federales reglamentarias del artículo 123 constitucional.

24

Época: Décima Época
Registro: 2008425
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II
Materia(s): Constitucional, Laboral
Tesis: 2a./J. 7/2015 (10a.)
Página: 1531

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ALCANCE DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL RESPECTO AL MONTO DEL SALARIO DE COTIZACIÓN. El derecho a la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, reconocido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también se encuentra previsto en los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 43 del Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Protocolo de Buenos Aires); 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,

PS.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

Sociales y Culturales. Ahora bien, en ellos, al igual que en la norma constitucional, no se precisan los presupuestos de acceso al derecho a la seguridad social, en relación con la obtención de una pensión jubilatoria, ni la forma de calcular su monto, por lo que es incuestionable que se deja al legislador ordinario la regulación de tales aspectos, para que establezca planes sostenibles que permitan lograr que todos tengan acceso a las prestaciones de seguridad social en un nivel suficiente, pudiendo establecer reglas para la cuantificación mínima y máxima del salario de cotización. No obstante lo anterior, las referidas normas reconocen que, cuando un trabajador cotiza a un plan de seguridad social que ofrece prestaciones para suplir la falta de ingresos, debe haber relación entre sus ingresos, las cotizaciones abonadas y la cuantía de la prestación pertinente.

Al respecto, debe señalarse que, sólo podría considerarse que las normas específicas reclamadas vulneran el artículo 123, apartado B, fracción XI de la Constitución y los derechos humanos a la seguridad y previsión social, si se acreditara que el “salario regulador”, no permitiera la subsistencia del pensionado en condiciones dignas; lo cual de ninguna manera puede afirmarse solo por las simples aseveraciones de la quejosa.

25

Ahora bien, de la lectura a la exposición de motivos de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, en conjunto con el espíritu del legislador, se desprende que el objetivo de la ley que nos ocupa, por reclamarse las disposiciones de la misma, es la restructuración del sistema pensionario para buscar el mayor plazo de vida sostenible del mismo, así como el modificar el régimen de pensiones y seguridad social, el cual estuvo vigente desde el año de 1976 –año de su promulgación–; por lo tanto, lo anterior se realizó con la finalidad de poder garantizar el pago de las pensiones actuales y futuras, que también son un derecho humano, dentro de un marco de sano financiamiento, soportado por las aportaciones de las entidades públicas y los afiliados de manera gradual y equitativa.

En ese sentido, las modificaciones realizadas al anterior sistema de pensiones, no resultan ser contrarias al principio de previsión y seguridad social como señala la quejosa, los cuales prevé el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 1 del “Protocolo de San Salvador”, así como el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; ya que dichas reformas no restringen ni menoscaban las prestaciones relativas al sistema pensionario que otorga el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán.

P.S.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

Lo anterior se dice, toda vez que el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se ha pronunciado en diversos amparos en revisión, respecto de los cambios y modificaciones que podrían y han sufrido diversas legislaciones en materia de seguridad social y laboral; lo anterior cobra relevancia con el siguiente criterio Jurisprudencial:

Registro digital: 166381

Instancia: Pleno

Novena Época

Materias(s): Constitucional, Laboral

Tesis: P./J. 124/2008

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Septiembre de 2009, página 37

Tipo: Jurisprudencia

ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES Y EL INCREMENTO DE LAS CUOTAS A CARGO DEL TRABAJADOR, NO VIOLAN NORMAS INTERNACIONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).
No puede estimarse que las modificaciones al anterior sistema de pensiones y el incremento de las cuotas a cargo del trabajador, sean contrarias al principio de progresividad de los derechos sociales que prevé el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 1 del Protocolo de "San Salvador", adiciona a dicha Convención, así como el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, habida cuenta que dichas modificaciones no restringen ni menoscaban las prestaciones relativas al seguro de jubilación, de retiro en edad y tiempo de servicios, invalidez, muerte y cesantía en edad avanzada e indemnización global que regulaba la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 1983.

26

En ese sentido, es de hacerse ver, que la reforma se vio justificada por los problemas financieros en que se encuentra el Instituto estatal y la necesidad del establecimiento de un porcentaje de aportación por parte de los pensionados para el fondo de pensiones con el fin de asegurar su viabilidad económica y del cobro futuro de las pensiones, lo que posteriormente se avaló por el Congreso Local en el procedimiento legislativo.

De tal forma, que resultaba ser una situación de suma gravedad sobre la cual se tenían que encontrar soluciones, lo cual así se hizo constar en la propia exposición de motivos de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, la cual, señala que "el sistema pensionario en Yucatán..... ya que se estima que

PS.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

dentro de los próximos años el número de personas en edad de jubilación aumente de manera exponencial, lo que significará un desbalance en el presupuesto del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán”.

En efecto, cuando un trabajador está en activo y recibiendo un salario, el mismo aporta una cantidad para el día en que se pensione, y este sistema está establecido para crear un fondo solidario para sufragar pensiones y servicios; y cuando el trabajador se retira lo que se crea es un derecho a obtener una pensión, que en el presente caso no se verá reducida sino que con la finalidad de pretender abusos futuros que podrían generarse en la última etapa de la vida laboral accediendo a salarios más elevados para llevarse una pensión más elevada sin haber actualizado ese nivel, se fijó un salario regulador, mismo que de conformidad con el artículo 3, fracción XXI de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, equivaldrá al 85% del promedio ponderado de los salarios de cotización que percibió la persona servidora pública durante los últimos veinte años de su vida activa como trabajador, previa actualización con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

27

Por otra parte, el problema de constitucionalidad planteado por la quejosa, residen que en cuanto al séptimo transitorio de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, que la base para calcular las pensiones no es la misma para todos los casos, lo que ocasiona que a unos les corresponda una pensión más elevada mientras que a otros una más baja, sin embargo, la quejosa pierde de vista que las personas en transición a quienes le aplica el transitorio séptimo de la Ley del Servicio a los Trabajadores del Estado de Yucatán, se ubican en situaciones diferentes en cuanto al tiempo que llevan cotizando, y a los años que les faltan para cumplir los 30 años de cotización al momento de entrar en vigor la Ley cuyos numerales se tildan de inconstitucionales, por tanto no se trata de servidores públicos en transición que se encuentren en la misma situación, de allí que en nada resulta inconstitucional que el legislador haya contemplado que el salario regulador de las personas servidoras públicas en transición dependerá de los años que a la fecha de entrada en vigor del Decreto por el que se reformó la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, le falten para cumplir treinta años de cotización.

Por su parte, el artículo 1º de la Constitución Federal, en sus párrafos primero y

P.S.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

quinto, establecen el principio de igualdad y no discriminación el cual, para ser limitado o configurado por parte del legislador mediante la generación de un trato desigual para personas iguales o igual para personas desiguales, tienen que encontrar una justificación constitucionalmente legítima, en especial cuando la distinción entre tipos de sujetos es realizada por la misma Constitución, como en el caso ocurre con el propio artículo 123 de nuestra Constitución Política Federal.

Así, los derechos a la igualdad general y a la no discriminación, previstos en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implican que las autoridades no traten diferente a individuos en una misma situación jurídica, y proscriben cualquier distinción motivada por razones de género, edad, condición social, religión u otra análoga que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

A lo considerado, devienen aplicables, tal como se aprecia, las jurisprudencias obligatorias en los términos relatados, invocadas por identidad de razón, de rubros y textos siguientes:

"SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO. EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY RELATIVA QUE PREVÉ EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS COMISIONES QUE POR SUS SERVICIOS PODRÁN COBRAR LAS AFORES, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 22 DE ENERO DE 2009).-Las indicadas garantías, contenidas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implican que las autoridades no traten diferente a individuos en una misma situación jurídica y proscriben cualquier distinción motivada por razones de género, edad, condición social, religión u otra análoga que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En ese tenor, el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, al establecer el régimen jurídico de las comisiones que por sus servicios podrán cobrar las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), no viola aquellas garantías constitucionales, pues la comisión relativa se aplica sin distinción a todos los trabajadores de quienes se maneja el fondo de su cuenta individual de ahorro para el retiro conforme a la Afore que eligieron, atendiendo a las políticas y criterios sobre la dispersión máxima permitida en el sistema, entre la comisión más baja y la más alta, mediante la definición de parámetros uniformes en función de la economía nacional que tienden a lograr una

DS



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

homogeneización para evitar un cobro excesivo, lo cual impide que se trate de manera diferente a los trabajadores por la administración de sus activos, con el imperativo legal de cobrar las mismas comisiones por servicios similares sin discriminar a trabajador alguno."

"IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA.-La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual. Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino que es imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que sea exigible que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo obligado que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus

P.S.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia.

En estas condiciones, contrario a lo que pretende la quejosa, sólo puede otorgarse un trato igual a desiguales cuando exista una justificación legítima, lo que en el caso no acontece, pues en el caso concreto, se trata precisamente de personas servidoras públicas en transición en diferentes condiciones, ya sea por los salarios que hubieren percibido, que incide en el importe cotizado, o por los años que le faltan para cumplir 30 años de cotización, es decir el salario regulador para los servidores públicos en transición guarda relación con el porcentaje correspondiente a los años trabajados, lo cual implica que si el pensionado cumplió ciertas obligaciones y en la medida de su salario de los últimos meses cotizados, existe motivos para calcular el porcentaje del salario regulador con base a dichas condiciones, pues dependerá de cada caso concreto, al encontrarse en situaciones desiguales.

30

Además, el porcentaje dispuesto en el artículo séptimo transitorio, se justifica porque su economía no se ve irremediamente afectada, ya que se compagina con el número de meses a promediar dependiendo de los años a que le falten por cumplir treinta años de cotización al momento de entrada en vigor de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, es decir se aplicó una gradualidad.

No pasa desapercibido, que el caso concreto para nada se trata de una reducción en el monto de la pensión a que se tiene derecho, sino se trata de un valor fijado por autoridad competente de conformidad con las reglas relativas, en el entendido de que el legislador local puede regular tal procedimiento de determinación de pensión.

Ahora bien, en cuanto al tema de la dignidad humana, se invocan los criterios sostenidos por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, compartidos por este órgano jurisdiccional, que sustentan lo siguiente:

"DIGNIDAD HUMANA. SU NATURALEZA Y CONCEPTO.-La dignidad humana es un valor supremo establecido en el artículo 1o. de la

25



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna."

"DIGNIDAD HUMANA. DEFINICIÓN.-La dignidad humana es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos."

En efecto, las normas en cuestión no resultan violatorias de los derechos humanos de igualdad jurídica y social, contenidos en los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que si ocurriría si el legislador hubiera actuado conforme a lo reclamado por la quejosa, en el sentido de que se otorgue la misma base para calcular la pensión a todos los servidores públicos, sin atender a que existen servidores públicos con diferentes condiciones, y que han cotizado por más años.

Así las cosas, al tratarse de situaciones diversas, no era el caso de que el legislador local los ubicara en la misma posición y les diera el mismo tratamiento y cargas.

31

Además, la gradualidad prevista en el transitorio séptimo del Decreto 532/2022 por el que se expidió la Ley del Seguro Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, se justifica porque su economía no se ve irremediablemente afectada, ya que podría ser el caso que incrementara su salario.

De igual forma, resulta incorrecto lo argumentado por la quejosa en el sentido de que el séptimo transitorio, transgrede el principio de previsión social, puesto que a su modo de ver, no se le permite al servidor público conservar la calidad de vida que tenía antes de salir del servicio. Lo anterior, en virtud de que contrario a lo que argumenta la quejosa, la gradualidad prevista en el séptimo transitorio, le permite al servidor público que el cálculo del salario regulador se considera con base al promedio de las cuotas que se vienen aportando durante los meses a promediar para el cálculo.

Al respecto, la Segunda Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia, ya determinó que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a) constitucional y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano, reconocen el derecho de jubilación, pero no detallan las bases o presupuestos para ejercer esos derecho,

PS.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

por lo que la forma de calcular el monto de las pensiones debe ser regulada por la ley correspondiente.

Tampoco puede estimarse que el séptimo transitorio de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, restrinja o limite el derecho humano a la seguridad social, puesto que el salario regulador de los servidores públicos en transición se constituye por un monto que toma en consideración su ingreso como trabajador, y al mismo tiempo se ubica en el monto requerido por la ley para tal efecto.

De igual manera, en el caso concreto, este H. Congreso del Estado de Yucatán, al expedir la nueva Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, justificó cabalmente en la exposición de motivos los aspectos que motivaron la reestructura del sistema pensionario, buscando en todo momento darle una sustentabilidad financiera al sistema pensionario de los trabajadores del Estado, y con ello, asegurar el pago de las pensiones presentes y futuras, protegiendo en todo momento sus derechos sociales.

A continuación, se transcriben las partes medulares de la exposición de motivos donde quedó plenamente justificada la necesidad de modificar el sistema pensionario:

“...SEGUNDA. Puntualizado lo anterior, de la iniciativa en estudio se extrae que busca un equilibrio entre los aspectos financiero, económico y social, el cual se traduzca en otorgar viabilidad al sistema de pensiones actual y, por consiguiente, tratar de asegurar las futuras pensiones de los trabajadores del Estado.

...
CUARTA...

Si bien, con el paso del tiempo la ley en comento ha tenido diversas modificaciones, se considera que estas han sido insuficientes para establecer las condiciones necesarias para la sustentabilidad financiera y operativa que requiere el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán para garantizar que el sistema pensionario en el Estado pueda continuar de una manera eficaz y positiva.

El sistema pensionario en el estado de Yucatán se encuentra en un punto crítico, tal y como se infiere de la exposición de motivos de la iniciativa de ley que nos atañe, pues se menciona que el incremento poblacional es superior a la capacidad que los diferentes esquemas de pensiones pueden soportar, ya que se estima que dentro de los próximos años el número de personas en edad de jubilación

RS



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

aumente de manera exponencial, lo que significará un desbalance en el presupuesto del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán.

Ante tal situación, es necesario modificar sustancialmente el esquema pensionario existente de los trabajadores al servicio del Estado, ya que este ha quedado rebasado y actualmente resulta inviable debido al incremento en la esperanza de vida, el decremento en la tasa de crecimiento de nuevos trabajadores, mal diseño del sueldo regulador o la insuficiencia de aportaciones, factores que representan un cambio descomunal en las circunstancias que existían al momento de planear el sistema pensionario vigente, situación que de continuar así, únicamente generaría un colapso financiero ante la falta de adaptabilidad a los tiempos modernos que permitan una mayor rentabilidad presupuestal a mayor tiempo.

En el estado de Yucatán no puede permitirse un sistema de pensiones debilitado, por lo que se requiere planificar un nuevo sistema que le permita al ente público mantener unas finanzas estables capaces de afrontar el reto del continuo crecimiento poblacional, al mismo tiempo que sea capaz de mantener dicho esquema por un tiempo cada vez mayor, dando así cumplimiento a la obligación del Estado de reconocer la seguridad social, como derecho humano.

33

En esa tesitura, es menester reestructurar y desarrollar un sistema pensionario que permita su funcionamiento a lo largo de los años, buscando el mayor plazo de vida sostenible de dicho sistema, a la par que se procure un perfeccionamiento que permita determinar con anticipación los problemas que puedan surgir e implementar acciones tendientes a su modificación, evitando una afectación a la estabilidad del sistema, ya que de no tratarse de manera oportuna, puede debilitarse, como desafortunadamente ha sucedido con diversos sistemas pensionarios a nivel nacional, que a la fecha, se encuentran en estado crítico y con una desesperada necesidad de actualización.

Otra de las problemáticas que motivan este proyecto de ley, es la situación que enfrenta el instituto respecto de la falta de financiamiento histórico, el cual compromete su viabilidad financiera. Asimismo, en la actualidad el ramo de seguridad social gasta más de lo que percibe por el concepto de cuotas y aportaciones, por tanto, es necesario ir incrementando su cobertura y mejorar el servicio; por lo que se considera oportuno el aumento de las cuotas y aportaciones provenientes tanto de las entidades públicas como de las personas servidoras públicas.

QUINTA. En tal virtud, tenemos que la iniciativa de ley tiene como objetivo central, garantizar el pago de las pensiones actuales y futuras con el conocimiento de que este objetivo sólo podrá cumplirse dentro del marco de un sano financiamiento, soportado

P-S



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

por las aportaciones de las entidades públicas patronales y los afiliados, en la forma gradual y equitativa que se detalla en la iniciativa en comento, así como la modificación de otros parámetros que son necesarios para darle viabilidad financiera al sistema pensionario.

...

Cabe destacar que, este proyecto de ley que se propone, es resultado de una amplia consulta que tuvo a bien realizar previamente esta Comisión Especial con la participación de diversos sindicatos de trabajadores, representantes patronales y demás entes que serán sujetos a la misma; por lo que, derivado del análisis y diagnóstico actuarial realizado al sistema de pensiones en comento, así como de las consecuencias que podrían derivar la falta de ajustes al marco normativo estatal en materia de seguridad social, se evidenció la necesidad de llevar a cabo este proyecto de iniciativa de ley, esto con motivo de que existe una insuficiencia de aportaciones por parte de las entidades públicas, mismos que se han venido acumulando pasivos desde administraciones pasadas, que han sido difíciles de recuperar.

Es importante tener en consideración los impactos que este proyecto de ley representa; sin embargo, resulta necesario emitir un ordenamiento que cumpla con las exigencias y necesidades sociales, económicas y financieras actuales, por lo que dichos cambios se realizarán de manera gradual, objetiva y respetando los derechos con los que cuentan las personas trabajadoras de la entidad.

34

...

OCTAVA. En virtud de todo lo anterior, quienes integramos esta Comisión Especial, hemos de concluir, que esta Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, significa un gran avance en la materia; ya que, como se ha señalado, la seguridad social es un derecho humano y este derecho consagrado a las personas, se convierte en una responsabilidad para el gobierno, por lo que con el propósito de continuar cumpliendo eficazmente con sus obligaciones el ISSTEY, como lo es el de garantizar sus prestaciones de seguridad social a sus derechohabientes y sus beneficiarios, es que plantea esta reforma de fondo para renovar el marco jurídico, a efecto de restaurar a esa institución y disminuir la presión financiera por la que atraviesa ese Instituto, y así otorgarle mayores esperanzas a los trabajadores de recibir una pensión digna y de conservar su fuente de trabajo.

Toda vez que, desde la creación del instituto, resulta innegable que las condiciones económicas, demográficas y recaudatorias de los últimos años ya son muy distintas a las que existían cuando se creó, por ello, es necesario, tomar medidas correctivas que modifiquen las condiciones, montos y requisitos de las pensiones del sistema



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

actual, ya que de continuar bajo el mismo esquema caería en una ruinosa descapitalización, pues el importe de los egresos por concepto de pensiones, jubilaciones y distintas prestaciones, seguirá creciendo hasta alcanzar niveles económicamente inaceptables, poniendo en riesgo la seguridad económica de los pensionados actuales y futuros e incluso la fuente de trabajo que da origen al sistema de pensiones.

Por consiguiente, con la presente ley que se somete a consideración, se fijan acciones determinantes encaminadas a conseguir un equilibrio entre los aspectos financiero, económico y social, los cuáles en su conjunto permitan una viabilidad financiera al sistema de pensiones actual y, por consiguiente, tratar de asegurar las futuras pensiones de los trabajadores del Estado.”

En consecuencia y de la lectura a la exposición de motivos de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, se observa que está es clara en establecer los motivos y fundamentos que dieron origen a la reestructuración completa del sistema de pensiones, toda vez que de la misma, se desprende que dicha iniciativa busca encontrar un equilibrio entre los aspectos financieros, económicos y sociales, y no únicamente en los aspectos financieros como señala la quejosa en la demanda que nos ocupa, para así otorgar la viabilidad al sistema de pensiones actual, y por consiguiente, el asegurar las futuras pensiones de los trabajadores del Estado.

35

Por lo que, para generar las sustentabilidad financiera y operativa, se requirió una modificación sustancial al esquema pensionario, toda vez que el mismo quedó rebasado y resultaba inviable, debido al incremento en la esperanza de vida, el decremento en la tasa de crecimiento de nuevos trabajadores, el mal diseño del sueldo regulador, así como la insuficiencia de aportaciones.

Siendo que, la presente reforma de ley, se planificó con la finalidad de mantener finanzas estables capaces de afrontar el reto continuo de crecimiento poblacional, y al mismo tiempo cumplir con la capacidad de mantener el multicitado esquema pensionado, dando así cumplimiento a la obligación del Estado de reconocer la seguridad social, como derecho humano.

Reiterando que el objetivo central de la ley, como del espíritu legislativo es el garantizar el pago de las pensionas actuales y futuras, con el conocimiento de que el objetivo solo podrá cumplirse dentro del marco de un sano financiamiento soportado

PS.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

por las aportaciones de las entidades públicas patronales y los afiliados, en la forma gradual y equitativa, como se plantea a lo largo de la multicitada ley.

En unión de lo comentado en párrafos anteriores, es evidente que la situación actual del Instituto, encuadra con lo establecido en la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte, citada con anterioridad - página 21, con registro 2015304-, por lo cual, no existe motivo para considerar que hubo violación a los principios de seguridad y previsión social, puesto que existió una justificación para su excepción, lo cual se solicita se tomado en consideración para los fines de resolver lo que constitucionalmente corresponde.

Por otro lado, el nuevo sistema de seguridad social está de concordancia con el principio de solidaridad, que se traduce en el esfuerzo conjunto de los trabajadores y del Estado, en su carácter de autoridad y en calidad de patrón, para garantizar el otorgamiento de las prestaciones constitucionales mínimas y para proteger a quienes menos tienen, mediante una distribución equitativa de las cargas económicas, pues la solidaridad social no implica que el Estado deba financiar y administrar las prestaciones de seguridad social y menos aún que sea su obligación otorgar dichas prestaciones; lo cual, guarda una estrecha relación con lo manifestado en la exposición de motivos y la finalidad del sistema de seguridad social impugnado.

De suerte que el principio de solidaridad social garantiza el otorgamiento de las prestaciones a que constitucionalmente tienen derecho todos los trabajadores para asegurar su bienestar y el de su familia, en especial el de los que obtienen menos ingresos, mediante una distribución equitativa de los recursos económicos necesarios

Para robustecer lo dicho, se transcribe el siguiente criterio:

Registro digital: 168658

Instancia: Pleno

Novena Época

Materias(s): Laboral

Tesis: P./J. 109/2008

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Octubre de 2008, página 8

Tipo: Jurisprudencia

PS.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

ISSSTE. CONCEPTO DE SOLIDARIDAD PARA EFECTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). De la exposición de motivos de la Ley de Pensiones Civiles de 1947, se advierte que la intención del legislador al crear a la Dirección de Pensiones (antecesora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) como un organismo descentralizado y dotarlo de facultades de inversión de los recursos obtenidos por las cuotas y aportaciones de seguridad social, fue la de eximir al Estado como tal, de la obligación de otorgar los beneficios respectivos, el cual únicamente estaría obligado a cubrir las aportaciones correspondientes en su carácter de patrón, según se desprende de la parte conducente de dicha exposición, que se lee: "Como consecuencia de la descentralización que se otorga a pensiones y de la posibilidad de inversiones productivas de que se le dota, será la misma Institución la que reporte el pago de su propio presupuesto, exonerando en consecuencia de esa carga al erario federal, quien únicamente quedará obligado a las aportaciones por las sumas iguales a los descuentos hechos para el fondo de los trabajadores al servicio del Estado". Lo anterior se corrobora si se toma en consideración que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 1983, en su artículo 177 imponía a las dependencias y entidades el deber de cubrir, en la proporción que a cada una corresponda, el déficit que llegara a existir en el Instituto y le impidiera cumplir con sus obligaciones -como lo es el pago de las pensiones-, no así al Estado como tal. Por otra parte, en el ámbito de la seguridad social de los trabajadores del Estado, el concepto de "solidaridad" se traduce en el esfuerzo conjunto de los trabajadores y del Estado en sí mismo considerado y en su calidad de patrón para garantizar el otorgamiento de las prestaciones constitucionales mínimas respectivas (pensiones por retiro, por invalidez o incapacidad y muerte; servicios de salud, turísticos y de recuperación y vivienda barata) y proteger a quienes menos tienen, mediante una distribución equitativa de las cargas económicas. Por ello, la solidaridad social no implica que el Estado deba financiar y administrar las prestaciones inherentes a la seguridad social y menos aún que sea su obligación otorgar dichas prestaciones. Tampoco implica que los beneficios de los pensionados (renta vitalicia y asistencia médica) necesariamente deban cubrirse con las cuotas y aportaciones de los trabajadores en activo (sistema de reparto) y con la ayuda subsidiaria del Estado. En esa virtud, el nuevo régimen de seguridad social que prevé la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1o. de abril de 2007, atiende al referido principio de solidaridad social, en la medida en que el sistema diseñado por el legislador ordinario garantiza el otorgamiento de las prestaciones a que constitucionalmente tienen derecho todos los trabajadores para asegurar su bienestar y el de su familia, en especial de los que obtienen menos ingresos, mediante una distribución equitativa de los recursos económicos necesarios para ello.

P.S.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

En esa tesitura, los argumentos vertidos por la parte quejosa sobre la inconstitucionalidad de la Ley del ISSTEY, son erróneos, ya que el nuevo esquema financiero busca distribuir equitativamente las cargas económicas de los trabajadores y el Estado para poder subsidiar las obligaciones presentes y futuras en materia de seguridad social, aumentando en igual medida las cuotas y aportaciones a las que están obligadas las entidades públicas, en atención al principio constitucional de solidaridad social.

Por otro lado, cabe señalar que los argumentos aducidos por la quejosa van encaminados a demostrar la inconstitucionalidad de los preceptos reclamados por supuestamente ser omiso este H. Congreso del Estado de Yucatán al que represento, en justificar de forma fundada el porque varia el número de meses a ponderar en razón de los últimos salarios percibidos, y porqué a algunos les corresponderán mayores o menores porcentajes respecto de otros, aduciendo que no existe razón constitucionalmente válida.

38

Pues bien, los argumentos manifestados resultan infundados porque tratándose de actos legislativos, que tienen el carácter de generales, abstractos e impersonales, la garantía de fundamentación se cumple cuando el órgano que los realiza está constitucionalmente facultado para ello, esto es, actúa dentro de su respectivo ámbito de atribuciones, y la garantía de motivación se respeta cuando las disposiciones legales que se emiten se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente tuteladas, sin que cada una de las hipótesis normativas que las integran tengan que se materia de una motivación específica.

El criterio que antecede ha sido sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial número ciento cuarenta y seis, que a la letra dice:

Registro digital: 232351

Instancia: Pleno

Séptima Época

Materias(s): Constitucional, Común

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186,

Primera Parte, página 239

Tipo: Jurisprudencia

**FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE
AUTORIDAD LEGISLATIVA.**



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica.

Registro digital: 232883

Instancia: Pleno

Séptima Época

Materias(s): Constitucional

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 77, Primera Parte, página 19

Tipo: Aislada

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS
LEGISLATIVOS. LOS PODERES QUE INTERVIENEN EN SU
FORMACION NO ESTAN OBLIGADOS A EXPLICARLOS.

39

Ni el Congreso de la Unión ni el presidente de la República, en el ejercicio de la función que a cada uno de ellos compete en el proceso de formación de las leyes, tienen la obligación de explicar los fundamentos o motivos por los cuales expiden y promulgan las leyes, ya que esa función sólo requiere el respaldo de la Ley Suprema, y así, tratándose de contribuciones, no hay duda alguna de que los artículos 65, fracción II, 72 y 73, fracción VII, del Código Político Fundamental, autoriza al Poder Legislativo Federal para imponer las necesarias a cubrir el presupuesto, en tanto el 89, fracción I, no sólo faculta, sino que, además, obliga al titular del Ejecutivo a promulgar las leyes que el Congreso de la Unión expida. Por otra parte, es necesario destacar que el procedimiento establecido en la Constitución Federal para elaborar las leyes, no exige que se tengan que explicar los motivos que cada uno de los órganos que intervienen en ese proceso tuvieron en cuenta para ejercitar la función legislativa que tienen encomendada. En otras palabras, tratándose de leyes, el fundamento de ellas no debe buscarse en cada acto legislativo sino en la Constitución Política del país, si son federales, o en la de cada Estado, si son locales. Por cuanto a la motivación baste decir que tal requisito se encuentra dentro de la esencia misma de las disposiciones legales que integran cada uno de los ordenamientos, toda vez que se refieren a relaciones sociales que exigen ser jurídicamente reguladas.

P.S.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

En ese sentido si la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán fue expedida por el Congreso de dicha entidad federativa para regular lo relativo al sistema de seguridad social de los servidores públicos, consecuentemente, dicha Ley y concretamente los numerales reclamados cumplen con la garantía de motivación, en virtud de que regulan, precisamente, relaciones sociales.

En tal virtud, se advierte que no existe razonamiento válido que demuestre la inconstitucionalidad de la referidos preceptos legales, dado que la emisión de los artículos controvertidos, se apeg a los principios constitucionales establecidos en nuestra Carta Magna y los ordenamientos legales que de esta deriven, por lo que se REAFIRMA que este órgano legislativo respetó y reconoció los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales que el estado mexicano forma parte.

4. P R U E B A S

40

1.- Instrumental de Actuaciones, que se hace consistir en todas y cada una de las actuaciones que favorezcan a mi representada.

2.- Documental Pública, consistente en la copia certificada de la iniciativa de Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, suscrita por los diputados José Crescencio Gutiérrez González, Erik José Rihani González, Jesús Efrén Pérez Ballote, Manuela de Jesús Cocom Bolio, Luis René Fernández Vidal y Dafne Celina López Osorio

3.- Documental Pública, consistente en la copia certificada del acta de sesión de la Diputación Permanente, de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán, de fecha 13 de julio del año 2022.

4.- Documental Pública, consistente en la copia certificada del acta de sesión de trabajo de la Comisión Especial para la atención de la situación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, de fecha 14 de julio del año 2022.

5.- Documental Pública, consistente en la copia certificada del acta de sesión

PS.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

de trabajo de la Comisión Especial para la atención de la situación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, de fecha 15 de julio del año 2022.

6.- Documental Pública, consistente en copia certificada del Dictamen de la Comisión Especial para la atención de la situación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, por el que se emite la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, de fecha 18 de julio del año 2022.

7.- Documental Pública, consistente en copia certificada del acta de sesión de la Diputación Permanente, de fecha 18 de julio del 2022, en la cual, convoca para la celebración del Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al primer año constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura.

8.- Documental Pública, consistente la publicación en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, de fecha 18 de julio del año 2022, en la cual se convoca a los ciudadanos Diputados de la LXIII Legislatura del Estado de Yucatán, al Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de su Ejercicio Constitucional.

9.- Documental Pública, consistente en la copia certificada de Acuerdo de fecha 31 de agosto del año 2022, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el mismo día.

10.- Documental Pública, consistente en copia certificada de la minuta del Decreto por el que se emite la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, de fecha 21 de julio del 2022.

11.- Documental Pública, consistente en la publicación del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán de fecha 21 de julio del 2022, que contiene el Decreto 532/2022, por el que se emite la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán.

12.- Documental Pública, consistente en copia certificada de Acuerdo de fecha 31 de agosto del año 2022, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de

P.S.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

Yucatán el mismo día, en el que se declaran electos los diputados para integrar la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera Legislatura, que fungirá durante el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio Constitucional, comprendido del 1 de septiembre al 15 de diciembre del año 2022.

13.- Presunciones Legales y Humanas en cuanto favorezcan a mi representada.

POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, atenta y respetuosamente solicito se sirva:

ÚNICO.- Tenerme por presentado con este memorial y documentos que acompaño, rindiendo en tiempo y forma a nombre de mi representada el Informe requerido en el expediente en que comparezco.

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

42

Mérida, Yucatán, a 12 de septiembre de 2022.

ATENTAMENTE



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

DIP. INGRID DEL PILAR SANTOS DÍAZ,
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva
de la Sexagésima Tercera Legislatura, del Período Ordinario de sesiones
correspondiente al Segundo año de su Ejercicio Constitucional.

016010

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2022 SEP 27 PM 1 41

SECRETARÍA DE JUSTICIA

- Recibido por Correo en (21) fojas con (1) copia del mismo con:
- (10) Anexos en (38)(3)(2)(5),(91)(5)(7)(41)(32) y (1) fojas, según sus certificaciones.
 - Una copia simple en (2) fojas, con el sobre que se agrega.